

JAVIER CARBAJAL

**SEGURIDAD 19 DE
AGOSTO DE 2026**

Argentina está en peligro de ser sometida por un Estado de vigilancia tecnoautoritario, advierte Amnistía Internacional

Amnistía Internacional elaboró un informe sobre el inquietante crecimiento de una infraestructura de vigilancia masiva en Argentina que vulnera los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y a la manifestación pacífica.

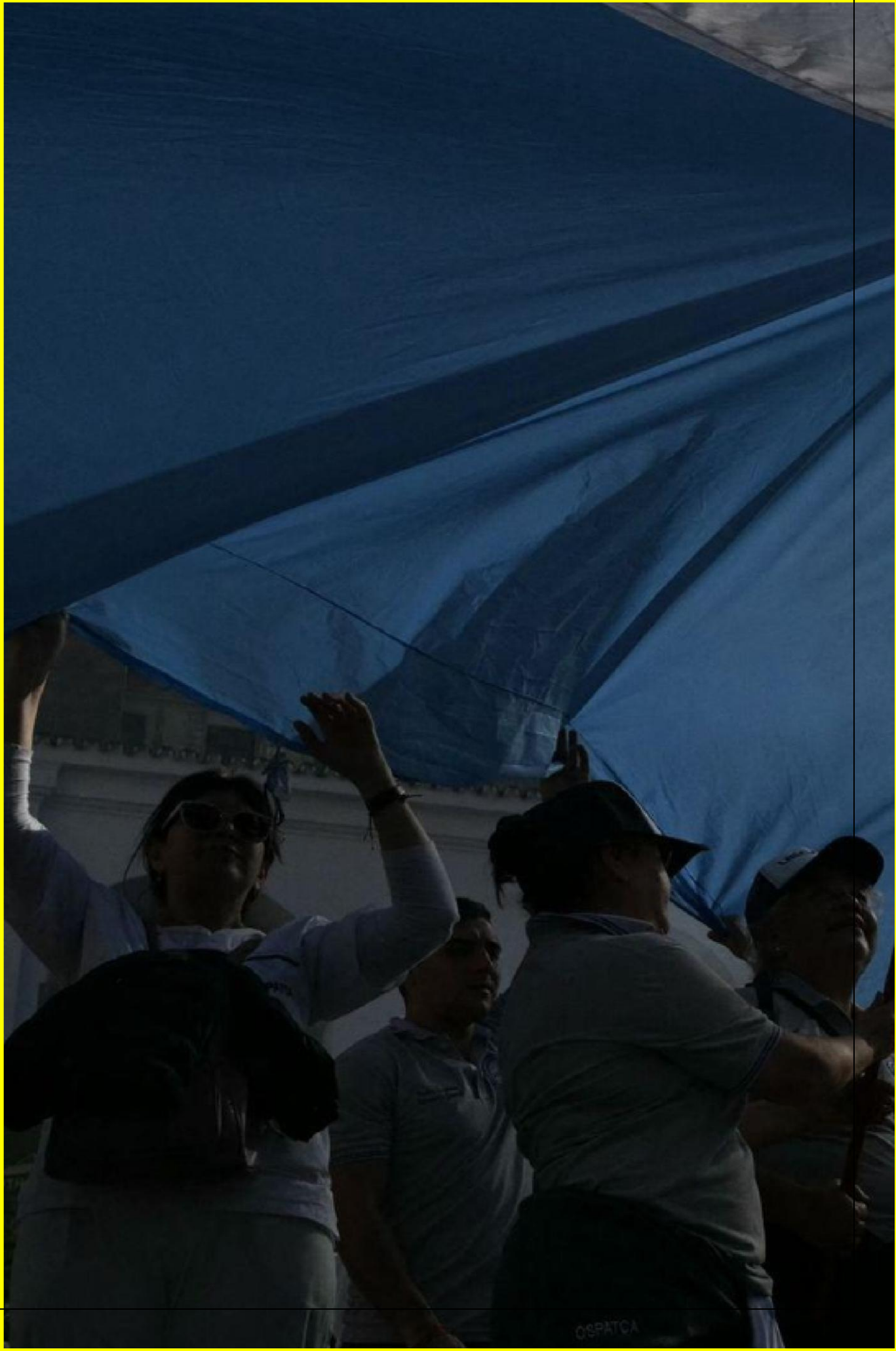


Imagen ilustrativa: manifestación convocada por sindicatos argentinos en la Plaza de Mayo, Buenos Aires, el 30 de abril de 2026, víspera del Día Internacional de los Trabajadores y en contra del gobierno de Javier Milei. JUAN MABROMATA / AFP VIA GETTY IMAGES

La Argentina está construyendo una infraestructura de vigilancia masiva que combina inteligencia artificial, reconocimiento facial, análisis de redes sociales, drones y videovigilancia a una escala cada vez mayor, un sistema que Amnistía Internacional ha calificado como “tecnoautoritarismo”. Esta es la principal advertencia de la ONG en su nuevo informe ‘Estado de vigilancia. La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina’, el cual analiza el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Según la investigación, durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se reformaron estructuras de seguridad e inteligencia y se incorporaron nuevas herramientas tecnológicas para ampliar la capacidad estatal de recopilar, cruzar y analizar información sobre personas. Entre ellas figuran bases de datos de manifestantes, vigilancia de redes sociales, reconocimiento facial, drones y cámaras móviles.

El problema, sostiene el informe, no es solamente qué tecnología se utiliza, sino el contexto institucional en

el que se despliega. Se trata de una ampliación de las capacidades de vigilancia y coerción sin un fortalecimiento equivalente de los mecanismos de control y rendición de cuentas.

“Se está utilizando la vigilancia generalizada contra la población argentina en los espacios tanto físicos como digitales, con efectos devastadores”, dijo Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Amnistía Internacional, en una nota de prensa. “Estas tecnologías se han convertido en parte integral de la infraestructura de control estatal: se ha atacado la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias”.

“Cuando el poder no quiere rendir cuentas, ataca a quienes hacen preguntas y utiliza cualquier medio a su disposición para vigilar, controlar y reprimir”.

MATT MAHMOUDI, AMNISTÍA INTERNACIONAL

Un país donde nadie pasa desapercibido

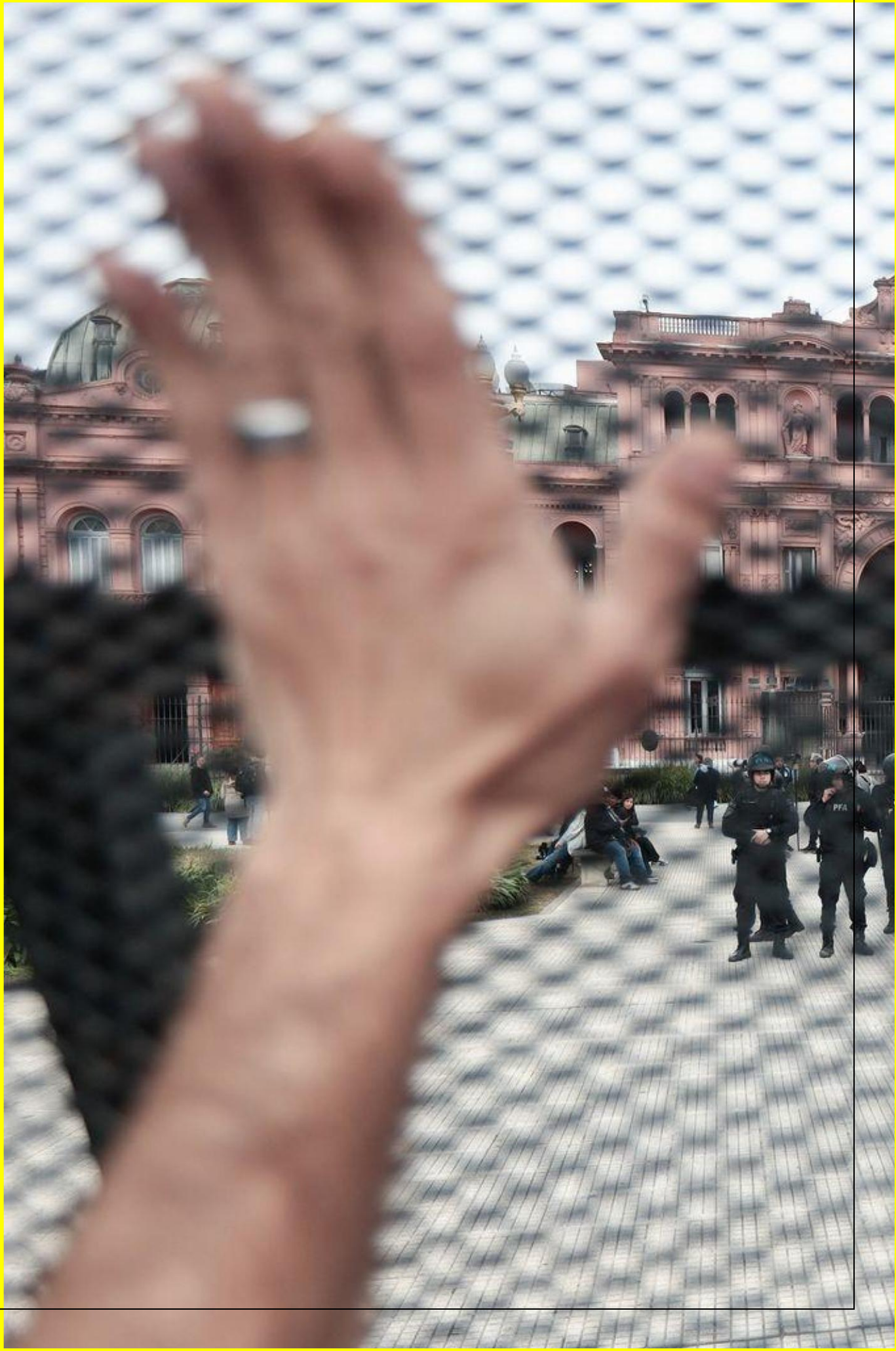
Entre 2024 y 2025, el Ministerio de Seguridad Nacional realizó contrataciones tecnológicas de vigilancia por al menos 1,2 millones de dólares. Entre las compras aparecen una licencia de Maltego, destinada a recopilar, cruzar y visualizar información procedente de redes sociales, sitios *web* y otras fuentes abiertas; una licencia de reconocimiento facial de Clearview AI; así como drones, junto con estaciones terrestres de operación, capaces de transmitir imágenes en tiempo real.

¿Qué es Clearview AI? Esta herramienta permite identificar personas a partir de imágenes y se integra en un modelo de reconocimiento facial basado en una enorme colección de fotografías obtenidas de fuentes públicas de internet. Amnistía acusó a la empresa de no haber realizado una evaluación pública, transparente y continua de los impactos de sus operaciones sobre los derechos humanos en Argentina. La ONG sostiene que Clearview debería cesar el desarrollo, venta, despliegue y exportación de sus tecnologías de reconocimiento facial al país.

Respecto a la proliferación de drones, “hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el

mundo", dijo Ana Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes. "A veces, cuando caminas, llegas a [donde estés yendo] y de repente ves el dron en el aire justo sobre tu cabeza. A veces a un par de metros.

¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?".



Un manifestante levanta las manos detrás de una valla mientras las fuerzas de seguridad montan guardia frente a la Casa Rosada.

NICOLAS SUAREZ / AFP VIA GETTY IMAGES

Cámaras, cámaras y más cámaras

En Buenos Aires se ha expandido una infraestructura de cámaras que, según el informe, alcanzó una cobertura del 82% en julio de 2025. Ese año se adquirieron 850 puntos de captura, equivalentes a 3400 cámaras. Las contrataciones seleccionadas por Amnistía en la ciudad sumaron cerca de 48 millones de dólares, incluyendo infraestructura para capturar, procesar y almacenar imágenes.

La combinación de estas tecnologías resulta especialmente delicada en las manifestaciones. El Gobierno nacional incorporó el llamado “ciberpatrullaje”, mientras que el “Protocolo Antipiquetes” promueve la identificación y sistematización de información sobre manifestantes, organizaciones y vehículos.

También fue creada la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), encargada de tareas relacionadas con análisis de datos, monitoreo digital,

reconocimiento facial y predicción del delito, sin mecanismos específicos de control externo.

Milei apuesta por una IA sin regulación para atraer inversiones millonarias a Argentina

El presidente de Argentina propone crear una nueva figura jurídica denominada

“sociedad anónima autónoma”, destinada a agrupar entidades operadas por agentes de IA o robots.

Efecto disuasorio del tecnoautoritarismo

El efecto más profundo de esta expansión podría no ser visible en ninguna pantalla. Amnistía lo denomina “efecto inhibidor”, la percepción de estar siendo vigilado modifica el comportamiento incluso cuando no existe una represalia concreta. Para estudiarlo, la organización entrevistó a 21 personas, entre periodistas, activistas, estudiantes y personas jubiladas, que llegaron a participar en movilizaciones en Buenos Aires. El informe registra menor disposición a asistir u organizar protestas, cambios en las estrategias de activismo, mayor cautela en las comunicaciones y prácticas de autocensura.

Así, la tecnología deja de ser una herramienta invisible destinada exclusivamente a reaccionar a delitos. Puede convertirse, advierte el documento, en un sistema capaz de identificar rostros, reconstruir movimientos, mapear vínculos, perfilar personas y registrar expresiones políticas. Por ello, los costos de estas políticas de seguridad son más que económicos, y sus efectos se pueden sentir en la manera en que vulneran la privacidad, la libertad de expresión y la disposición de los ciudadanos a ocupar el espacio público.

“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utilice sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetrados por estos sistemas rindan cuentas de sus actos”, señaló Mahmoudi.

Por último, se debe resaltar que lo que ocurre en Argentina es solo un reflejo de una tendencia global. “Lo que está sucediendo en Argentina no es un hecho aislado”, añadió el especialista de Amnistía. “En todo el mundo, los Estados que implantan prácticas autoritarias están aumentando su uso de las tecnologías de vigilancia contra personas que defienden los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes.

Demasiado a menudo esto va acompañado de una falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas".